

81  
79  
87  
91  
94  
97  
02  
04  
  
07  
07  
  
15  
  
28  
32  
34  
42  
44  
51  
66  
71  
76  
78  
88  
97

## UN PAIS EN CONSTRUCCION

Por: Fernán E. González G.

Los tres informes parciales de la investigación *Colombia: conflicto social y violencia* que componen el presente volumen de *Controversia* se articulan en torno al proceso de construcción de la nación colombiana como contexto histórico de los problemas actuales de violencia que aquejan al país. Así, los problemas presentados en las zonas de reciente colonización son el producto y la repetición de conflictos anteriores de las zonas campesinas, pero reeditados en un contexto mucho más complejo por la presencia de dos nuevos factores: la guerrilla izquierdista y el narcotráfico, que encuentran un terreno abonado en las contradicciones producidas por el desarrollo agrario del país a lo largo de su historia.

La idea central que liga los tres artículos parte de la no resolución del problema campesino en el proceso de modernización agraria, que se centró en el apoyo a la industria y en la generación de divisas. La no resolución del problema campesino ha venido produciendo la expulsión masiva de los pobladores rurales hacia las ciudades y hacia nuevas zonas de colonización: este proceso expulsivo ha venido caracterizando la

historia colombiana desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, pero se aceleró durante el siglo XX por la rápida modernización de la economía agrícola y por la violencia política en zonas rurales (tanto la "pequeña violencia" de los años treinta como la "gran violencia" de mediados de siglo). Este proceso permite dibujar el escenario de gran parte de los conflictos violentos de la actualidad, que quedan así enmarcados dentro de una historia de "larga duración".

Sólo que dichos conflictos se agravan de modo espectacular por las nuevas circunstancias y nuevos actores que irrumpen en la escena: por una parte, las posibilidades de seguir expandiendo ilimitadamente la frontera agraria se vienen agotando de manera paulatina; por otra, la acción de grupos guerrilleros y la masiva irrupción del narcocultivo y del narcotráfico constituyen factores que multiplican y modifican esencialmente los conflictos que se dan en el "normal" desarrollo del agro colombiano. Los nuevos y viejos factores de conflicto se agravan debido a la secular precariedad de la presencia del Estado como instrumento neutral para la pacífica resolución de los enfrentamientos. La privatización y fragmentación del poder que caracterizan la historia colombiana constituyen el antecedente lógico de la tendencia a la resolución privada de estos conflictos, que está en la base de la actual violencia. La creciente incapacidad del Estado para institucionalizar los conflictos sociales actuales tiene una historia de larga duración: el proceso incompleto de construcción del Estado-Nación en Colombia.

En este argumento confluyen los tres artículos de este volumen, que enriquecen el análisis desde la perspectiva y el enfoque propios de su particular disciplina. Así, Consuelo Corredor Martínez, combina en su artículo "Crisis agraria, reforma y paz: de la violencia homicida al genocidio" dos tipos de análisis: en las dos primeras partes de su estudio (el problema agrario en relación con la violencia homicida primero y luego con las recientes masacres), realiza un análisis típico de economista cruzando variables y usando el departamento como unidad de análisis; en las dos últimas partes introduce elementos históricos y geográficos en un enfoque más interdisciplinar del problema.

En el desarrollo de su análisis, Consuelo Corredor concluye, en la primera parte de su artículo, que no es evidente la causalidad directa entre los indicadores de conflicto agrario y la presencia de violencia homicida, de modo que indica que la lucha campesina por la tierra suele ser pacífica. En una segunda parte, trata de interpretar las recientes masacres en un contexto de contrarreforma agraria, como una especie de "revancha terrateniente" contra las invasiones de la ANUC en los años setenta. Esto se sustenta por el hecho de que el 94% de las masacres ocurre en el 78% de los departamentos que tuvieron 23 o más invasiones.

Sin embargo, para una discusión ulterior de esta hipótesis convendría señalar que no parece haber suficiente información para sacar esta conclusión: habría que considerar otros aspectos tales como las variaciones en la estructura de propiedad, los cambios demográficos y los aspectos más directamente políticos como la relación de los gamonales regionales y de los grupos guerrilleros con las áreas donde se produjeron las masacres. Además, el análisis se basa en unidades demasiado grandes para que arrojen conclusiones válidas (la Costa Atlántica o el departamento de Córdoba como un todo indiferenciado, sin analizar en detalle las subregiones y municipios de los departamentos donde se presentaron invasiones y/o masacres). Por eso, si se excluye el departamento de Córdoba, el número de masacres de la Costa Atlántica se hace poco significativo; si se excluye también al Magdalena y Cesar, el fenómeno de las masacres prácticamente desaparece de la Costa, puesto que no se dan masacres en Sucre (donde hubo gran número de invasiones de tierras) y Atlántico.

Por otra parte, el conjunto de departamentos "andinos" representaría, según los cálculos de Corredor, el 21% de las invasiones y el 41% de las masacres, lo que parece indicar una mayor relación entre invasiones y masacres que la registrada para la Costa Atlántica (56% de invasiones y 31% de masacres). De hecho, algunos departamentos andinos como Antioquia y Santander, superan en masacres a Córdoba: además, varias de las masacres de Córdoba se presentan cerca de los límites de Antioquia, en zonas muy penetradas por la colonización antioqueña. Esto tendería a indicar más bien un choque entre diferentes colonizaciones y el desplazamiento

de los pobladores originales por otros. Todo esto pondría en cuestión la relación entre revancha terrateniente y masacres, al menos si no se consideran otras variables como modificaciones en la tenencia de la tierra y presencia guerrillera en la zona.

La tercera y cuarta parte se mueven en un estilo diferente de análisis, que juega más con la geografía e historia, haciendo énfasis en la diferenciación regional de los procesos. La tercera parte sitúa el problema agrario dentro de la dinámica regional del poblamiento de la nación, en relación con el proceso de construcción de la nación. Contrasta un corredor de regiones densamente pobladas (altiplanicie cundiboyacense hasta el centro de los Santanderes y altiplanicie caucana hasta la meseta nariñense, interrumpidas por Tolima-Huila, caracterizadas por una alta presión relativa sobre la tierra, pero casi sin conflictos violentos) con las zonas circundantes adonde está migrando continuamente el excedente poblacional de la primera zona, que son campesinos expulsados de sus áreas originales por motivos económicos o políticos. Estas zonas de vertiente (valles interandinos y los correspondientes flancos de las cordilleras) se constituyen en receptáculos de estas poblaciones expulsadas en un proceso que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII y que todavía continúa hasta nuestros días: son regiones de población aluvional, colonización espontánea, poca cohesión social, muy proclive a los conflictos.

Este proceso migratorio se aceleró más recientemente, durante este siglo, por dos dinámicas que a veces llegan a entrelazarse: una económica, la modernización de la agricultura y la fragmentación del minifundio por la presión demográfica; otra política, la violencia de los años cuarenta y cincuenta. Estas dinámicas se van a reflejar especialmente en la colonización del Oriente colombiano (Amazonia y Orinoquia) pero también en las del Magdalena Medio y del Urabá antioqueño. Obviamente, en todos estos sitios la colonización empresarial y terrateniente acompaña siempre a la colonización campesina, cuya población y desmonte del territorio es aprovechada por los grandes propietarios empresariales.

Finalmente, Consuelo Corredor termina analizando el caso del área de influencia de la región antioqueña, donde coexisten una agricultura de exportación muy importante (café y banano) con una agricultura tradicional en descomposición (zona andina del departamento). En comparación con la zona andina, la zona tropical (Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio) es muy conflictiva, lo mismo que el área de expansión antioqueña sobre las regiones limítrofes (Alto San Jorge, Alto Sinú, Urabá chocoano y el Chocó minero). La zona andina relativamente pacífica (excepto Medellín y su área circundante, por el influjo del narcotráfico) contrasta con la extremada violencia de la zona tropical y del área en expansión: además, la zona tropical es la más deficitaria en servicios públicos y en estructura vial, aunque seguramente la apertura de las nuevas vías proyectadas va a dislocar aún más a la subregión.

Esta regionalización del problema agrario de acuerdo con la dinámica poblacional es retomada por los otros dos artículos, a cargo de Fabio Zambrano y José Jairo González, que entre los dos cubren la historia de la ocupación del territorio nacional desde mediados del siglo XVIII hasta hoy.

El artículo de Fabio Zambrano, "Ocupación del territorio y conflictos sociales en Colombia", parte de la descripción de los cambios demográficos y sociales de la segunda mitad del siglo XVIII: el masivo y rápido proceso de mestizaje produce una sociedad llena de tensiones y conflictos, que expulsa excedentes poblacionales de las altiplanicies hacia las laderas y valles interandinos, donde se van instalando grupos sociales de "hombres montaraces", al margen de toda organización social, fuera del control del gobierno español y de la iglesia católica. Esta población no sujeta, extremadamente móvil, trashuma con facilidad de un sitio a otro, negándose a establecer "su casa en poblado" y a integrarse a la población "civilizada", no sometién dose a las normas legales. Para los virreyes ilustrados como Guirior y el arzobispo Caballero y Góngora, esta población era "un monstruo indómito", cuyas inclinaciones criminales eran la raíz de todos los males de la sociedad neogranadina.

El control de la autoridad virreinal sobre la población y el territorio era tenue y precario por la existencia de am-

plios espacios vacíos que servían de refugio a los indómitos mestizos. Varios intentos de reorganización poblacional como los de Latorre y Miranda (desde las Sabanas del Viejo Bolívar hasta Cartagena) y de Mier (desde Mompox a lo largo del Magdalena Medio y Bajo) terminaron en fracasos parciales. Mucho más exitosa fue la labor de Mon y Velarde en Antioquia. Las visitas de oidores como la de Moreno y Escandón evidenciaron la dinámica poblacional de la altiplanicie cundi-boyacense. Además, mucha de esta reorganización desapareció con las guerras de la Independencia.

Esta población flotante evidencia las dificultades de la hacienda del siglo XVIII y XIX para mantener sujeta a la población; estas dificultades aumentaron con el discurso igualitario de la joven república, rápidamente asimilado por la población mestiza a la que servía muy bien para justificar su posición en la sociedad. Por otra parte, el discurso republicano estableció la igualdad jurídica entre las poblaciones, rompiendo la rígida jerarquía interna propia de la colonia que diferenciaba entre ciudad, villa y parroquia, lo que producía consecuencias de orden administrativo al establecer diferencias, privilegios y sujeciones entre ellas. Ahora las poblaciones espontáneas nacidas en las márgenes de las haciendas, formadas por antiguos esclavos, arrendatarios o aparceros, lo mismo que los poblados de las nuevas zonas de colonización, adquieren la categoría de municipios con todos los privilegios antes reservados a la "república de los blancos", españoles y criollos.

La apertura de varias fronteras agrarias significó el desplazamiento de los antiguos ejes de poblamiento colonial del centro de la vida económica y la ocupación de extensos terrenos baldíos en las vertientes cordilleranas y los valles interandinos adonde se desplaza una masa heterogénea de colonos de diferentes regiones de tierra fría y templada. Esto vuelve a poner en evidencia la falta de sujeción de la fuerza de trabajo en las haciendas, tanto tradicionales como nuevas.

Las nuevas haciendas reciben una población aluvional, sin lazos internos de cohesión social, ni formas de control. Además, los propietarios son generalmente ausentistas, que delegan su autoridad en el mayordomo y gamonal local: no se

crean entonces lazos de dependencia patriarcal entre hacendados y personal de la hacienda, como sucedía antes. Los hacendados intentan sujetar la mano de obra mediante la monopolización de la apropiación de baldíos, sin lograrlo nunca plenamente. Esta movilidad de la mano de obra es reforzada por el discurso liberal, que cala muy rápidamente en la sociedad mestiza marginal, tan necesitada de legitimación y representación, lo mismo que por la legislación agraria del radicalismo (1874-1882), que otorga propiedad al cultivador de terrenos baldíos. Esta base legal reforzará la lucha del colono por la tierra: muchos colonos lograrán imponerse en la lucha contra los concesionarios de baldíos, individuales o agrupados en compañías comerciales, pero no siempre ni plenamente. El resultado normal será la coexistencia de la colonización campesina espontánea con la del terrateniente-empresario. En esta línea, Zambrano analiza el caso de los colonos del Quindío en lucha contra la compañía Burila, lo mismo que los conflictos en torno a la colonización del Sumapaz y del norte del Valle: las tres regiones serán escenario importante de los episodios de la "gran violencia" de 1946-1957.

Menciona también Zambrano los casos de regiones con baja integración a la totalidad de la nación desde los tiempos coloniales (Patía, Magdalena Medio, Urabá, Guajira y piedemonte de los Llanos Orientales), que coinciden bastante con los actuales escenarios de la violencia. Analiza luego un poco más en detalle los casos del Valle del Patía y del Magdalena Medio: en ambas regiones, se produce una ocupación tardía del territorio y una confluencia de varias regiones y distintas corrientes migratorias, configurándose dos sociedades *sui generis*, basadas en una población nunca muy firmemente controlada. El Patía era el refugio natural de negros cimarrones y libertos de Panamá, Chocó, Valle y Cauca desde los tiempos coloniales, lo que produjo una población poco sujeta, propensa al bandolerismo social, que va a proporcionar reclutas a las guerrillas realistas en la guerra de independencia y a los liberales de Obando y Mosquera en las guerras civiles del siglo XIX. Por otra parte, el Valle del Magdalena será también el teatro privilegiado de encuentros bélicos con indígenas rebeldes durante la Colonia y de las guerras del siglo XIX, pasando fácilmente de unas manos a otras (desde la "campana admirable" de Bolívar hasta la campana de Gaitán Obeso a finales

del siglo), lo que evidencia a las claras que nunca estuvo suficientemente controlado por ninguno de los bandos en pugna.

Por último, el artículo de José Jairo González, "Aspectos de la colonización contemporánea del Oriente colombiano", prolonga el análisis anterior del poblamiento hasta el momento actual pero en un ámbito geográfico distinto: la Orinoquia y Amazonia colombianas, donde se reeditan muchos de los procesos anteriormente descritos en el artículo de Zambrano, que responden también a la dinámica del problema agrario analizado por Corredor. En muchos aspectos, las zonas de colonización reciente heredan los conflictos sociales y políticos de las regiones de donde se evaden los colonizadores, precisamente en búsqueda de una válvula de escape a sus problemas.

En esa línea de análisis, José Jairo González señala cómo la colonización del Oriente responde a la dinámica interandina del agro: los primeros caminos de penetración se debieron al impulso de la industria extractiva de la quina y del caucho y al impacto de algunos sucesos políticos internos o externos (guerra de Mil Días, guerra con el Perú, etc.). Agotados estos impulsos, la colonización regresa al estancamiento normal hasta que nuevas situaciones del interior andino y de la frontera suroriental le dan nuevo impulso. La modernización del agro y la violencia de los años cincuenta producirían así un doble proceso: la urbanización acelerada del país y la colonización oriental, que encontrarían al Estado y a las ciudades sin ninguna preparación para manejar los nuevos problemas que se presentaban.

El Estado se mostró incapaz de organizar y apoyar los procesos colonizadores de manera que beneficiaran realmente a los colonos originales: el Oriente colombiano fue objeto de una de las más grandes migraciones campesinas de los tiempos modernos durante las décadas del cincuenta, sesenta y parte del setenta, lo que convirtió a las fronteras de colonización en espacios abiertos y poco controlados. En ese contexto, las políticas inadecuadas del Estado produjeron una crisis temprana de la colonización y una recomposición social de los colonizadores, precisamente en las zonas donde el Estado invirtió mayores recursos (Arauca, Caquetá). Se consolidaron allí nuevas

haciendas con pastos mejorados y cultivos agroindustriales, al tiempo que los colonos originales debieron regresar a las ciudades o buscar nuevos frentes de colonización. La respuesta a la crisis fue múltiple: paros cívicos campesinos, apoyo a grupos de izquierda, etc. Pero, sobre todo, se evidenció en la migración de retorno de los colonizadores primarios a los frentes urbanos de la colonización (Florencia, Villavicencio, San José del Guaviare, Saravena, Granada) o migración a otros frentes como el Guaviare, Guayabero, Bajo Caguán.

En buena parte, el fracaso de las políticas estatales se debió al escaso conocimiento de las diversas regiones y de sus respectivas comunidades: esto hacía resultar precaria la articulación de las regiones a la nación y dificultaba el establecimiento de mecanismos de control del Estado, diferentes a la mera criminalización de la protesta rural y a la guerra antisubversiva. Esto evidencia el papel de "incubadora" que estas regiones orientales han jugado en el desarrollo de muchos de los actuales conflictos, como se ve en la presencia de grupos guerrilleros y contraguerrilleros, narcocultivo y narcotráfico. En la actualidad, estos conflictos han llegado ya a los frentes urbanos de la colonización, con el retorno a ellos de muchos colonos primarios, que han hecho aumentar aceleradamente la población de estas antiguas "ciudades de paso".

Luego, González va analizando la colonización en sus variaciones regionales (Arauca, Casanare, Ariari, Guayabero, Guaviare, El Retorno, Caquetá y Putumayo), lo que permite un estudio comparativo del conjunto del proceso. Este conjunto evidencia la continuidad del proceso de expulsión campesina, señalado por Corredor y Zambrano: el Arauca recibirá migración campesina de los Santanderes y Boyacá; los campesinos boyacenses expulsados, se volcarán sobre el piedemonte casanareño; el Ariari recibirá campesinos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila; el Guayabero será penetrado por muchas familias campesinas de Cundinamarca, Huila y Tolima; los problemas campesinos del Huila, Tolima, Cauca y Nariño encontrarán una salida normal en la colonización del Caquetá y Putumayo.

Como es lógico, estas regiones se convertirán en escenarios privilegiados de muchos de los enfrentamientos de la vio-

lencia de los años cincuenta, que acelera estos procesos de colonización en todos los frentes con gente desesperada que busca escapar a las masacres de entonces. La “guerrilla rodada” de Dumar Aljure en 1954, las “columnas de marcha” del Comandante Richard en 1955, las “repúblicas independientes” del Pato y Guayabero se desarrollan en este contexto geográfico e histórico. Actualmente, la presencia de frentes de las FARC, ELN, M-19 y EPL reeditan muchos de los procesos de entonces. Todos estos conflictos son reforzados y modificados por la irrupción del narcocultivo y narcotráfico, que alterarán esencialmente el modelo de la colonización campesina tradicional.

En resumen, los tres artículos aquí presentados convergen en torno a la idea de que los actuales conflictos deben enmarcarse en una “historia de larga duración”: en el largo proceso de la constitución de la nación colombiana y de la formación del Estado. Las tensiones acumuladas durante siglos en los que se han venido aplazando reformas estructurales urgentes y necesarias para solucionar los problemas en germen empiezan a pasar “su cuenta de cobro” a la sociedad actual: esas tensiones y soluciones aplazadas indefinidamente han venido creando un “caldo de cultivo” propicio a la búsqueda de soluciones violentas, que a su vez generan nuevas respuestas violentas en un efecto de “bola de nieve”, cuyas consecuencias futuras son incalculables. El clima proclive a la violencia se fue actualizando y haciéndose realidad con la presencia de grupos guerrilleros y contraguerrilleros y la entrada del narcocultivo y narcotráfico, que encontraron todos un campo abonado en las características de estas regiones.

Sin embargo, siempre es posible desandar el camino andado y corregir los errores cometidos en el pasado: lo más urgente es aprender las equivocaciones anteriores para evitar seguir repitiéndolas y continuar acumulando indefinidamente los problemas que deben ser resueltos. En el caso de la colonización que acabamos de describir, sería urgente evitar que la colonización espontánea, surgida como válvula de escape de los conflictos de la sociedad campesina tradicional, siga reproduciendo los problemas que le dieron origen.

La lección que los actuales conflictos violentos le ofrecen al país es que no se puede postergar indefinidamente la solución a los problemas estructurales, so pena de llegar a momentos tan dramáticos como el actual. El Frente Nacional constituyó un momento de rectificación nacional cuando el país descubrió que el desencadenamiento de la violencia como solución política no hace sino producir más violencia, hasta que ésta escapó al control de los actores que la comenzaron voluntariamente y produce efectos que van mucho más allá de lo que ellos pretendían inicialmente. Pero el país no aprovechó el respiro de paz del Frente Nacional para acometer las reformas que eliminaran el caldo de cultivo de la violencia y construyeran una sociedad más igualitaria. La búsqueda de la paz como creación de un ámbito pacífico para la resolución de los conflictos es inseparable de reformas institucionales y sociales que hagan creíbles y legítimas las instituciones del Estado. La tradicional incredulidad del pueblo colombiano frente a la clase política de derecha e izquierda, la innata desconfianza de la sociedad colombiana en todos sus niveles frente a la intervención del Estado y las reservas del pueblo colombiano frente a las propuestas de una solución violenta a sus problemas, son el fruto de la experiencia secular de frustraciones repetidas una y otra vez, que han generado un clima de incredulidad y desconfianza frente a la vida política del país. Este escepticismo generalizado frente a lo político, que incluye tanto a la derecha como a la izquierda, agrava la secular tendencia colombiana a no aceptar la legitimidad de las instituciones: esta tendencia se expresa en los "pronunciamientos" de las guerras civiles del siglo XIX, en la violencia de los enfrentamientos políticos de los años treinta, en la violencia de los años cincuenta, en el recurso a la lucha armada como medio para cambiar las instituciones, en el recurso a la justicia privada, etc. Todas estas formas implican una base común: el no reconocimiento del Estado como detentador único de la violencia legítima.

Los problemas actuales del país pueden ser interpretados en dos perspectivas: la primera sería leer los conflictos violentos de hoy como la descomposición caótica de un orden idílico y patriarcal, donde no se presentaban enfrentamientos ni problemas, que se rompió con el advenimiento de la modernidad, la pérdida de los valores cristianos y la llegada

al país de las ideas de izquierda. Pero la realidad histórica que hemos descrito no se compadece con esta imagen de orden tradicional que algunos tienen del pasado colombiano. Esta perspectiva que interpreta la actual situación como el resultado del regreso de la sociedad al caos primordial piensa la búsqueda de la paz como la restauración del orden perdido y la perpetuación del *status quo* que imperaba en la sociedad.

Pero hay otra perspectiva, en que la búsqueda de la solución pacífica de los conflictos se liga indisolublemente con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que es la que tratamos de señalar. Partiría de enmarcar los actuales problemas dentro del proceso histórico, contradictorio y a veces violento, de ocupación de un territorio, de formación de una nación y de construcción de un Estado nacional, que está lejos de haber concluido. Este proceso incompleto y parcial está en la base de la precariedad del Estado, de la escasa legitimidad de sus instituciones y de la falta de consenso general sobre los valores pluralistas y democráticos.

Esta perspectiva histórica no implica una absolución total por las culpas del pasado pero sí un realista examen de conciencia sobre la responsabilidad que todos compartimos con respecto a la actual situación: los errores del pasado y los problemas no solucionados pueden irse acumulando y reforzándose con los problemas del presente hasta configurar una situación conflictiva como la que afrontamos. Por esto, la reflexión sobre los problemas presentes a partir de una perspectiva histórica constituye un llamado para "enmendar la plana" y evitar que se sigan repitiendo los errores del pasado.